



Consejo Económico y Social

Distr. limitada
17 de mayo de 2004
Español
Original: inglés

Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal

13º período de sesiones

Viena, 11 a 20 de mayo de 2004

Proyecto de informe

Relator: Ajebe **Ligaba Wolde** (Etiopía)

Adición

Debate temático sobre el imperio de la ley y el desarrollo: contribución de las actividades operacionales en materia de prevención del delito y justicia penal

1. En sus sesiones tercera y cuarta, celebradas el 12 de mayo, la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal examinó el tema 3 del programa, que se refiere a lo siguiente:

“Debate temático sobre el imperio de la ley y el desarrollo: contribución de las actividades operacionales en materia de prevención del delito y justicia penal:

a) La cooperación internacional en materia de justicia penal a efectos de consolidar el imperio de la ley, incluida la lucha contra la corrupción y las nuevas formas de delincuencia, con miras a promover el crecimiento y el desarrollo sostenible;

b) La consolidación del imperio de la ley y la reforma de las instituciones de justicia penal, haciendo hincapié en la asistencia técnica, incluso en la etapa de reconstrucción posterior a un conflicto.”

2. La Comisión tuvo ante sí una nota del Secretario General acerca del debate temático sobre el imperio de la ley y el desarrollo (E/CN.15/2004/3).

3. La conducción del debate estuvo a cargo de los panelistas siguientes: Pardeep Ahluwalia (Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional), Hana Snajdrova (República Checa), Ramli Atmasasmita (Indonesia), Hermán Galán Castellanos



(Colombia), Peter Gastrow (Sudáfrica) y Rilwanu Lukman (ex Secretario General de la Organización de Países Exportadores de Petróleo).

4. Hicieron declaraciones los representantes de Argelia, la Argentina, Australia, Austria, el Brasil, el Camerún, el Canadá, Croacia, Cuba, El Salvador, la India, la Jamahiriya Árabe Libia, Jamaica, Marruecos, Omán, la República de Corea, la República Árabe Siria, Sri Lanka, Suecia, Uganda y el Uruguay. Se dirigieron a la Comisión observadores de los institutos afiliados a las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales siguientes: Consejo Consultivo Internacional Científico y Profesional, Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia y Asociación Internacional de Funcionarios encargados de la Lucha contra el Tráfico y el Uso de Estupefacientes.

5. La Comisión decidió abordar los dos subtemas del programa en un solo debate interactivo. Se invitó a los participantes a que formularan observaciones sobre las ponencias de los panelistas y a que examinaran también la forma en que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito podría contribuir de manera concreta a consolidar el imperio de la ley.

A. Deliberaciones

6. El debate temático estuvo presidido por el Sr. Thomas Stelzer (Austria), segundo Vicepresidente de la Comisión, quien lo inició recordando que en todas partes del mundo se impulsaban iniciativas para fortalecer el imperio de la ley. En algunos Estados se debían restablecer la ley y el orden en sus aspectos básicos; en otros se afrontaban dificultades para garantizar la independencia de la judicatura y el respeto de los derechos humanos, en tanto que aún en otros se debía luchar contra la corrupción o promulgar leyes apropiadas y establecer mecanismos de aplicación eficaces para hacer frente a los nuevos tipos de delincuencia. El orador subrayó que en la actualidad se reconocía ampliamente la interrelación que existe entre el desarrollo social y económico y un sistema de justicia imparcial. Los organismos de desarrollo, que en otros tiempos se habían mostrado renuentes a aportar recursos para financiar los gastos de las cárceles, las comisarías y las actividades operativas de las entidades encargadas de aplicar de la ley, habían llegado a reconocer que la anarquía podía malograr los planes de desarrollo mejor concebidos. Invitó a los Estados a que intercambiaran información sobre la forma en que sus programas de cooperación técnica ayudaban a otros Estados a promover el respeto del imperio de la ley, y expresó la esperanza de que el debate condujera a un aumento de la solidaridad y a un compromiso más resuelto de los Estados y los organismos de desarrollo para intensificar la cooperación internacional.

7. El Director Ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, al dirigirse a los participantes, en la sesión, hizo alusión a un documento reciente sobre la función que pueden cumplir las Naciones Unidas en la tarea de hacer frente a las amenazas a la seguridad y el desarrollo que suponen la delincuencia organizada, la corrupción y el terrorismo, aprobado durante la sesión de la Junta de los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación celebrada en abril del presente año en Viena. El texto se distribuyó a los participantes en un documento de sesión. Subrayó que la paz dependía del imperio de la ley, y que la delincuencia perjudicaba y entorpecía el desarrollo

sostenible. Los grupos delictivos organizados eran los primeros en sacar provecho de la anarquía, sus actividades contribuían a prolongar los conflictos y agravaban las crisis humanitarias. Invitó a la Comisión a que brindara orientación a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre las formas de hacer frente a los problemas relacionados con la delincuencia y el desarrollo.

8. El primer ponente expuso en líneas generales el enfoque adoptado por el Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional. Éste colaboraba con los países en desarrollo para crear instituciones vigorosas que garantizaran la existencia del entorno estable necesario para el desarrollo sostenible. Su labor se basaba en las prioridades fijadas en las estrategias de reducción de la pobreza que preparaban los países en desarrollo. Era un factor dinámico importante para ayudar a los países en desarrollo a evitar situaciones que pudieran conducir a fallas en la sociedad y la comunidad, que a menudo traían aparejados el caos y podían crear una vorágine cuyo resultado era la desintegración del Estado. Además, con ella se prestaba asistencia a estos países para su reconstrucción después de un conflicto o para que continuaran por el largo camino hacia la superación de la pobreza, al ayudarles a crear instituciones de gobierno vigorosas y fundadas en la equidad y la justicia. La prevención del delito contribuía a instaurar condiciones en que pudiera afianzarse la asistencia para el desarrollo. Hacer frente a las causas básicas de la delincuencia, como la marginalización y la victimación, era una forma complementaria de reducirla o prevenirla y de mantener la estabilidad sociopolítica, a fin de no interrumpir la inversión en el desarrollo y, en último término, de obtener resultados positivos. Se aludió a los objetivos de desarrollo del milenio (A/56/326, anexo) que constituían la base de la estrategia del Organismo orientada a los destinatarios y a la idea de que se ha hecho mucho más para contribuir al bienestar y el progreso de la humanidad previniendo las malas acciones que realizando las buenas.

9. La segunda panelista se refirió a la situación a los países con economías en transición, en los que la noción del imperio del derecho debía restablecerse sobre nuevas bases democráticas después de los cambios políticos de 1989. Todas las instituciones de justicia penal habían sufrido profundos cambios tras el derrumbe de los regímenes anteriores y al comenzar los países a reconstruir sistemas de justicia penal eficaces. Durante el período de transición, antes de que se crearan estructuras de justicia penal más vigorosas y especializadas en los nuevos tipos de delitos, la delincuencia organizada había sacado provecho de las lagunas de sistemas de justicia penal inmaduros, lo que significó que la delincuencia económica y la corrupción se convirtieran en parte de la vida cotidiana. Habían pasado diez años antes de que las personas pudiesen palpar los resultados de la reforma de los sistemas de justicia penal. La panelista dijo que la implantación del imperio de la ley había modificado las actitudes en toda la sociedad, y que se habían producido acontecimientos positivos gracias a la cooperación con los sistemas de justicia penal de países que tenían una experiencia mucho más prolongada en la lucha contra los nuevos tipos de delitos. Al respecto, se aludió a la eficaz cooperación entre los organismos encargados de aplicar la ley en el marco del Programa mundial contra la trata de personas impulsado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Se habían ido estableciendo relaciones de trabajo entre los funcionarios encargados de la aplicación de la ley de los países de origen, tránsito y destino. Los conocimientos especializados obtenidos por las autoridades de la República Checa se estaban poniendo actualmente a disposición de otros Estados, por ejemplo, la República de Moldova, en el contexto del Programa Mundial.

10. En el debate que siguió, varios oradores sugirieron formas de incorporar la labor de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en el marco general de las iniciativas internacionales para consolidar el imperio de la ley. Se examinó el nexo aparente entre el restablecimiento del imperio de la ley en los países con economías en transición y el surgimiento de tipos de delincuencia nuevos y complejos. Otros oradores se refirieron al caso de Estados como el Afganistán, donde se había registrado un aumento considerable de la producción y el tráfico de opio, pese a que se había recibido un volumen enorme de asistencia. Otros oradores subrayaron que era cada vez más profundo el abismo entre los países desarrollados y los países en desarrollo, y señalaron que existía la noción generalizada de que el aumento de la delincuencia reflejaba la ausencia de expectativas que caracterizaba a vastos sectores de la sociedad en muchos países en desarrollo.

11. El Presidente recordó que durante la conferencia de Roma sobre la justicia en el Afganistán, la reconstrucción de las infraestructuras legales del Afganistán se había considerado como la primera etapa en el proceso general de reconstrucción. En un Estado desintegrado como el Afganistán, no era realista esperar resultados en un lapso breve. Se pidió a un representante de la Secretaría que presentara alguna información sobre el programa de reforma de la justicia penal de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en el Afganistán. Se explicó que el programa se había preparado en función de una evaluación de las necesidades, y que en él se tenían en cuenta las prioridades determinadas por las autoridades del país, como la reforma del sistema de justicia de menores, la reconstrucción del sistema penitenciario y la creación de un órgano de lucha contra la corrupción. El Director Ejecutivo agregó que en el Afganistán las cuestiones relacionadas con las drogas debían considerarse en un contexto amplio y que eran determinantes las iniciativas de reconstrucción de la justicia penal. Subrayó la importancia de adoptar un enfoque amplio en que se equilibraran las medidas de represión y de prevención, y la de actuar en asociación con los interesados, asignándoles la principal responsabilidad en el programa, así como la necesidad de que la Comisión impartiera orientaciones a la Oficina sobre la manera de aprovechar al máximo los recursos disponibles.

12. Varios oradores consideraron que en los debates se debían examinar cuestiones fundamentales, como las causas de la delincuencia, el hecho de que incluso el desarrollo y la globalización podían dar pie a delitos económicos, el de que se utilizaban territorios vecinos para socavar el imperio de la ley en el país y el de que había redes delictivas con base en otros países que se sustraían al control de los Estados.

13. El tercer ponente subrayó que, al haberse extendido a muchos países, los delitos transnacionales eran más difíciles de descubrir, lo que hacía que la cooperación internacional fuera más indispensable que nunca. Dijo que la entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (resolución 55/25 de la Asamblea General, anexo I) y de dos de sus Protocolos y la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (resolución 58/4 de la Asamblea General, anexo) constituían un hito en la historia de la prevención del delito y la justicia penal. Observó, además, que cuando la aplicación de la ley, la administración de justicia y los sistemas financieros eran débiles surgían más oportunidades de cometer delitos graves y realizar otras actividades ilícitas afines. Destacó la importancia de la cooperación internacional en cuestiones judiciales, como la asistencia judicial recíproca y la

extradición. Hizo hincapié asimismo en la importancia, tan fundamental como la anterior, de dotar de normas mínimas de profesionalismo a los funcionarios públicos pertenecientes a los sistemas de justicia penal, como medio de garantizar la cooperación efectiva sobre el terreno. Informó con detalles acerca de las últimas actividades auspiciadas por la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental para combatir la delincuencia transnacional, la corrupción y el terrorismo. Recomendó que la comunidad internacional fortaleciera la cooperación en cuestiones jurídicas, la creación de capacidad y la cooperación técnica entre Estados Miembros, a la vez que puntualizó que el intercambio de opiniones y experiencia entre el personal de justicia penal era una condición indispensable para luchar con eficacia contra la delincuencia transnacional.

14. El cuarto ponente destacó la importancia de la prevención del delito en el medio urbano y la amenaza que representaba la presencia de grupos armados ilegales en Colombia. Con frecuencia se imponían estrategias de protección incompatibles con el imperio de la ley. Los ciudadanos, que ya no confiaban en la policía, constituían sus propios grupos policiales o paramilitares privados, que a su vez se convertían en un riesgo para la seguridad y el estado de derecho. El orador subrayó la necesidad de seleccionar y formar cuidadosamente a las fuerzas policiales, así como la importancia del control cívico de la policía. Se refirió también a mecanismos no convencionales de resolución de conflictos y explicó la experiencia de Colombia en la creación de casas de justicia, en las que se suministraba información, se orientaba y se ofrecían servicios a personas víctimas de violencia en el hogar y de abusos sexuales.

15. El quinto ponente se refirió a la prestación de asistencia a los países de la región de la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo, la mayoría de los cuales eran países menos adelantados o en desarrollo y, algunos, países que emergían de un conflicto. Subrayó la importancia de que se planificaran las actividades operacionales destinadas a fortalecer el imperio de la ley en los países en situación de transición y en los países que emergían de un conflicto teniendo en cuenta sus necesidades, ya que cada sociedad que había superado un conflicto era diferente y requería soluciones propias. También era imperativo crear una relación de colaboración plena entre los distintos coparticipes. Refiriéndose a países que emergían de un conflicto, en que el Estado era débil y los recursos escasos, el ponente dijo que el reto mayor consistía en contrarrestar el escepticismo de la población respecto del imperio de la ley y en restaurar la confianza en las instituciones. Por consiguiente, si bien la acción de reforma del sistema de justicia penal debía tender a transformarlo de modo perdurable, también era necesario obtener resultados palpables en el corto plazo. Por ejemplo, la condena de un funcionario de alto nivel con fuertes vínculos en el ámbito político podía incidir sobremedida en la forma en que se percibía el imperio de la ley. Un elemento fundamental que contribuirá a restaurar la confianza en las instituciones era un mantenimiento del orden público activo y respetuoso de los derechos humanos, inclusive mediante la acción de la comunidad. Indicó al respecto que la composición de las fuerzas policiales y del poder judicial debía corresponder a todos los sectores de la sociedad. Sostuvo que el reordenamiento de prioridades que se produjo a raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 podría haber perjudicado a los países en desarrollo, ya que el nuevo programa internacional no respondía a las situaciones nacionales. El ponente abogó por que se prestara mayor asistencia técnica a los países menos adelantados y a los países en desarrollo para permitirles

cumplir sus obligaciones internacionales y por que hubiera flexibilidad en materia de plazos.

16. El último ponente observó que, si bien los países pobres disponían de legislación y de sistemas de justicia penal, posiblemente se planteaban dificultades en la etapa de aplicación por la falta de recursos. Subrayó igualmente la carga que la deuda externa y los obstáculos al comercio representaban para los países en desarrollo. Reiteró que éstos también debían asumir la parte de responsabilidad que les competía en la lucha contra la corrupción. En muchos casos, la reforma de la justicia era cuestión de voluntad política. Subrayó que en países muy pobres había que establecer una escala de prioridades, ya que no podían resolverse todos los problemas simultáneamente.

17. Varios oradores celebraron el empeño de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito por colocar la prevención del delito y la justicia penal en un contexto socioeconómico más amplio, como se establece en la Declaración de Viena sobre la delincuencia y la justicia: frente a los retos del siglo XXI (resolución 55/59 de la Asamblea General, anexo). Muchos oradores hicieron hincapié en la interrelación entre el imperio de la ley y el desarrollo, señalada en la Declaración del Milenio (resolución 55/2 de la Asamblea General). Los oradores reconocieron la importancia de la labor de fomento del imperio de la ley que la Oficina llevaba a cabo. En el mismo orden de ideas se destacó la pertinencia de promover la aplicación de reglas y normas de justicia penal. Se subrayó la importancia de movilizar recursos que permitieran a la Oficina prestar asistencia técnica en apoyo de la reforma de la justicia penal. Se destacó asimismo la importancia de establecer alianzas con otras entidades, incluidas las instituciones financieras internacionales y las organizaciones no gubernamentales.

18. Varios oradores pusieron de relieve los esfuerzos nacionales, bilaterales y regionales por consolidar el imperio de la ley y la cooperación internacional. Se presentaron proyectos de asistencia técnica ejecutados en etapas de reconstrucción posterior a un conflicto. Se consideró que la reciente entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y de dos de sus Protocolos y la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción representaban adelantos importantes que consolidarían el imperio de la ley en el ámbito internacional. Muchos oradores se refirieron a las medidas que habían adoptado sus gobiernos para poder llegar a ratificar y aplicar los instrumentos mencionados.

19. Se sostuvo que la lucha contra la corrupción era primordial para lograr establecer el imperio de la ley y la buena gobernanza, a fin de que la población depositara la confianza necesaria en sus instituciones y representantes. Se consideró que el imperio de la ley era una condición sine qua non de un sistema de justicia penal justo, eficaz y eficiente. La justicia penal no podía funcionar sin instituciones legislativas justas y eficientes; los criterios de selección y formación de los miembros de los tribunales y de los funcionarios del sistema de justicia penal debían ser la integridad y el respeto de las normas de derechos humanos.

20. Se hizo referencia a la importancia de la experiencia adquirida en el fomento del imperio de la ley, en particular en la etapa de reconstrucción posterior a un conflicto. Varios oradores subrayaron que el principio de justicia y el imperio de la ley debían ser valores fundamentales de las misiones de mantenimiento de la paz de

las Naciones Unidas y que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito debería cooperar con el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la Secretaría y otras entidades pertinentes de las Naciones Unidas. Se subrayó que éstas debían participar en todo el espectro de las operaciones de paz, desde la etapa de prevención de conflictos hasta la de reconstrucción posterior a un conflicto. Debería prestarse atención adecuada también a la prevención del delito, en particular en medios urbanos, a fin de fomentar la confianza entre los ciudadanos y los organismos encargados de aplicar la ley.

21. El Presidente resumió las deliberaciones diciendo que se había coincidido en que el desarrollo no podría sostenerse sin el imperio de la ley. Al mismo tiempo se había observado que el desarrollo debía abarcar programas que atacaran las causas fundamentales de la delincuencia. La pobreza, la falta de desarrollo y la marginación de las comunidades permitían que la “sociedad incivil” prosperara. La implantación del imperio de la ley era una labor a largo plazo que suponía cambios considerables en el seno de una sociedad y de una cultura. La reforma del sistema de justicia penal, inclusive la creación de instituciones y de capacidad, era indispensable para la implantación y el mantenimiento del imperio de la ley. Las reformas habían de ser exhaustivas, interdisciplinarias y perdurables. Asimismo, debían contener una cantidad equilibrada de medidas preventivas y represivas. La acción en pro del imperio de la ley debía englobar a todos los interesados, incluidos el Gobierno, la sociedad civil, las comunidades locales y a las organizaciones no gubernamentales a fin de que todos y cada uno asumieran el cometido como propio.

22. Los mecanismos no convencionales de resolución de conflictos, inspirados en los principios de justicia restaurativa, podrían cumplir una función primordial en la promoción del imperio de la ley. La reforma del sistema de justicia penal de los países en situación de transición y de los países que emergían de un conflicto debería dirigirse a fomentar la confianza de la población, en particular en la policía. Los programas de asistencia para el desarrollo deberían basarse en la situación única del país solicitante y ser compatibles con las prioridades nacionales. Tales programas deberían tener un componente de fomento del imperio de la ley, que incluyera el fortalecimiento de las instituciones de justicia penal. Se requería establecer un diálogo abierto con los organismos de desarrollo, las instituciones financieras y otros órganos competentes para determinar la forma de aumentar el nivel de asistencia financiera destinada a proyectos dedicados a cuestiones relativas al imperio de la ley, en consonancia con lo que dijeran los países que la necesitaban. Debía aumentarse la asistencia técnica dirigida a los países menos adelantados y a los países en desarrollo para que pudieran atender a sus necesidades prioritarias y cumplir sus obligaciones internacionales.

23. A modo de conclusión, el Presidente señaló que, en países que lindaban con países en guerra o en que el régimen de gobierno hubiera sucumbido, la reforma del sistema de justicia penal se veía obstaculizada por la ausencia del imperio de la ley en los países limítrofes. Con frecuencia la acción regional tenía repercusiones más amplias. Al respecto, habría que considerar la posibilidad de trabajar de consuno con las organizaciones regionales y subregionales pertinentes. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito debería cooperar con el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz para velar por que el fomento del imperio de la ley fuera parte integral de las operaciones de consolidación de la paz y de las actividades de reconstrucción posteriores a un conflicto. Los dividendos de la

paz deberían invertirse en crear sistemas de justicia penal justos y eficaces y a formar al personal encargado de hacer cumplir la ley.

B. Curso práctico

24. Los institutos de la red del Programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal organizaron un curso práctico sobre “El estado de derecho y el desarrollo: la contribución de las actividades operacionales en materia de prevención del delito y justicia penal”. La coordinación del curso estuvo a cargo del Centro Internacional de Reforma del Derecho Penal y de la Política de la Justicia Penal y del Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia. El curso práctico estuvo presidido por un Vicepresidente de la Comisión, T. P. Sreenivasan (India). El representante de Italia y observadores de los diferentes institutos de la red del Programa, organizaciones no gubernamentales y el Consejo Británico presentaron nueve ponencias. Expertos de Estonia e Irlanda, también presentaron ponencias. El curso práctico se estructuró para facilitar el diálogo interactivo entre los participantes.

25. En sus observaciones introductorias, la Directora Ejecutiva del Centro Internacional de Reforma del Derecho Penal y de la Política Penal, recordó que el tema del curso práctico guardaba relación con el debate temático efectuado en el plenario, pero siguiendo un criterio más práctico con el fin de examinar monografías y buenas prácticas. El Director de la División para Asuntos de Tratados de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito se refirió a la Declaración de Viena y los planes de acción pertinentes (Resolución 52/261 de la Asamblea General, anexo), así como a la atención que recientemente las Naciones Unidas y la comunidad internacional han venido prestando al carácter central y la importancia que reviste establecer o reestablecer el estado de derecho en situaciones posteriores a los conflictos y de reconstrucción.

26. El Director del Centro Irlandés de Derechos Humanos describió el progreso alcanzado en la elaboración de modelos de códigos penales y de detención para situaciones posteriores a los conflictos, sobre la base de la labor realizada por expertos que representan diversos sistemas jurídicos y diferentes regiones geográficas. Se había realizado un esfuerzo para elaborar códigos, procedimientos y directrices sencillos que se pudiesen utilizar durante la fase de transición hasta tanto se aprobasen las leyes definitivas. El Director Ejecutivo de la Asociación Internacional de Funcionarios Encargados de la Lucha contra el Tráfico de Drogas y el Uso de Estupefacientes, hizo hincapié en la necesidad de coordinación y de utilizar prácticas óptimas, especialmente en la prevención, y subrayó que la reconstrucción posterior a los conflictos era un proceso difícil en el que se debía hacer frente a cuestiones relativas a la economía, las drogas y el delito. En su presentación, el Director del Instituto Africano para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente se refirió especialmente a la relación que existe entre el delito y el desarrollo, y señaló algunos factores fundamentales para lograr el desarrollo sostenible en África, incluidos el crecimiento económico, la modernización política y la protección de los derechos humanos.

27. El Presidente de la Junta de la Fundación Asiática para la Prevención del Delito, señaló que la justicia penal no estaba dividida en compartimentos y se debía ver como un sistema. Un enfoque integral constituía también el principio rector de la asistencia exterior para el desarrollo que el Japón presta para mejorar la justicia penal y de la capacitación del personal encargado de ejecutar las leyes y de justicia penal que el Instituto de Asia y el Lejano Oriente para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente brinda en 24 Estados de la región.
28. El observador del Consejo Británico presentó el programa del Consejo titulado “Acceso a la justicia en Nigeria”. Subrayó la necesidad de mejorar el acceso a la justicia en el contexto de los objetivos de desarrollo del milenio, e hizo hincapié en que las relaciones entre los sistemas de justicia oficiales y officiosos eran complejas y era menester comprenderlas mejor.
29. El observador del Instituto Europeo de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia, afiliado a las Naciones Unidas, presentó un informe sobre un estudio publicado en 2001 y centrado en la metodología para evaluar la prestación de asistencia a nivel internacional. Se hizo hincapié en la necesidad de contar con modalidades de asociación integradoras entre los países donantes y receptores. El observador del Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, brindó información sobre proyectos y actividades en materia de reforma de la justicia penal en la región de América Latina.
30. El representante de Italia, expuso de manera general los proyectos financiados por Italia en la esfera del fomento institucional y la reforma de la justicia penal que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia y otras organizaciones internacionales estaban ejecutando.
31. En su presentación, el observador del Instituto Internacional de Estudios Superiores en Ciencias Penales trató sobre un programa de capacitación para la judicatura de Afganistán dirigido a fomentar la capacidad de formación.
32. El relator del curso práctico, Jay Albanese, del Instituto Nacional de Justicia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, ofreció una exposición general de las cuestiones objeto de debate. Explicó las diferentes etapas del complejo proceso para establecer o restablecer el estado de derecho, que comenzaba por hacer frente a las disparidades económicas y continuaba por cuestiones relacionadas con las familias, la ética y la educación. La voluntad de cambio sólo se podía generar mediante la adopción de medidas firmes en materia de control y prevención de la corrupción, en tanto que era preciso contar con medios jurídicos para mantener el control social, la seguridad personal y el acceso a la justicia. La capacidad institucional del sistema de justicia penal se debía reforzar mediante la capacitación y la prestación de asistencia técnica. La función de las Naciones Unidas en la tarea de aplicar los programas era crucial. Se deberían realizar esfuerzos coordinados dirigidos a promover tanto el estado de derecho como el desarrollo socioeconómico.
-